



La muerte de los precios justos: el neoliberalismo del FMI y la crisis de los pequeños agricultores de Pakistán

2026/05/14



Por Qammar Abbas, para RAÍCES

En el campo paquistaní, millones de campesinos y pequeños agricultores trabajan largas horas para alimentar a la nación. Sin embargo, recibir una compensación justa por sus cosechas se ha vuelto cada vez más inalcanzable. Durante la última década, sucesivos gobiernos han desmantelado sistemáticamente el sistema de Precio Mínimo de Sustentación (PMS) — una política históricamente diseñada para proteger a los agricultores de la volatilidad del mercado y garantizar ingresos estables.

Este retroceso no fue accidental. Siguió las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el creciente compromiso del Estado con la política económica neoliberal. Lo que presenciamos hoy no es un mero ajuste de política. Es una transformación estructural de la economía agrícola de Pakistán — una que desplaza el poder desde los agricultores y las



instituciones públicas hacia los intermediarios corporativos y los actores financieros.

Durante décadas, el sistema PMS funcionó como una salvaguarda básica para los agricultores. Al garantizar un precio mínimo y asegurar la compra estatal a través de instituciones como la Corporación Paquistaní de Almacenamiento y Servicios Agrícolas (PASSCO, por sus siglas en inglés), la política brindaba un grado de estabilidad en una economía agrícola de por sí impredecible. Los pequeños agricultores podían al menos contar con recuperar parte de sus costos de producción y mantener un modo de vida modesto. Hoy, sin embargo, esta red de seguridad desaparece rápidamente.

El trigo, el cultivo básico del país, constituye la columna vertebral de los medios de vida rurales y de la seguridad y soberanía alimentaria nacional a través de este sistema protegido. En el año fiscal 2023–24, el trigo se cultivaba en 9,6 millones de hectáreas (37% del área total sembrada) en Pakistán, contribuyendo con el 9,0% al valor agregado agrícola y con el 2,2% al PIB nacional. El mecanismo de compra pública garantizaba que los agricultores contaran con un comprador confiable, independientemente de las fluctuaciones del mercado, al tiempo que se mantenían reservas estratégicas de alimentos para la nación.

Los dictámenes del FMI y el asalto neoliberal a los agricultores

En septiembre de 2024, bajo la presión del programa de rescate financiero del FMI por 7.000 millones de dólares, el gobierno federal se retiró efectivamente del sistema de precio de sustentación del trigo. El FMI exigió que Pakistán desregulara su mercado triguero y redujera el gasto fiscal asociado a la compra y el almacenamiento. En diciembre de 2024, el gobierno eliminó formalmente el precio de sustentación del trigo, cediendo el poder de fijación de precios a los comerciantes privados e intermediarios que dominan los mercados de granos. Las consecuencias para los agricultores fueron inmediatas: sin una compra garantizada, se vieron obligados a vender el trigo



a precios deprimidos en la chacra, mientras continuaban enfrentando costos crecientes en fertilizantes, semillas, diésel, electricidad y riego.

Los programas económicos del FMI en Pakistán, encubiertos bajo el lenguaje de la “estabilización” y la “reforma”, han erosionado sistemáticamente los fundamentos del apoyo público a la agricultura. Cada acuerdo de préstamo trae nuevas condiciones: recortar subsidios, privatizar empresas públicas, liberalizar el comercio y eliminar los controles estatales sobre los precios agrícolas. Detrás de estas prescripciones tecnocráticas subyace un proyecto político: transformar la economía agraria de Pakistán, de una que sirve a su pueblo, a una que sirve al capital global.

Bajo la presión del FMI, sucesivos gobiernos han retirado la intervención estatal en la agricultura y los sistemas alimentarios, permitiendo que las fuerzas del mercado — efectivamente, los monopolios corporativos y de comerciantes — fijen los precios. Bajo la presión del FMI, la supresión del PMS del trigo hundió los precios en chacra de 350 USD/tonelada en 2023 a 215 USD/tonelada en 2025, entregando el control a los cárteles de comerciantes. En 2026, las tarifas indicativas oscilan entre 260 y 300 USD/tonelada en un contexto de predominio privado, dejando a los pequeños agricultores entre un 30 y un 40% por debajo de sus costos.

La supresión o manipulación de los PMS para el trigo y el arroz ha devastado a los pequeños productores, quienes ya no pueden recuperar siquiera sus costos de producción. A medida que el costo de las semillas, los fertilizantes, el combustible y el agua aumenta por los recortes de subsidios y la inflación, los ingresos de los agricultores colapsan. Mientras tanto, las corporaciones agroindustriales y los intermediarios del mercado siguen acumulando riqueza mediante la especulación de precios y las cadenas de ganancia orientadas a la exportación.

Esto es el neoliberalismo en la práctica: transferir riqueza de las mayorías a las minorías, borrar las protecciones sociales en nombre de la eficiencia y profundizar la dependencia del capital extranjero. Las prescripciones



neoliberales del FMI no son reformas — son instrumentos de recolonización, diseñadas para mantener al país atrapado en ciclos de deuda, austeridad y extracción corporativa.

La resistencia campesina y el retorno parcial del PMS

Los campesinos de todo el país no aceptaron estas políticas en silencio. A principios de 2025, los agricultores se movilaron en protestas masivas en todo Punjab y Sindh, exigiendo el restablecimiento de precios justos y la compra pública. Las manifestaciones encabezadas por el Comité de Coordinación Campesina de Pakistán (PKRC, por sus siglas en inglés) y organizaciones aliadas de agricultores pusieron al descubierto los orígenes políticos de la crisis. Los líderes campesinos dejaron claro que el retiro del PMS no obedecía a necesidades agrícolas domésticas, sino a las condicionalidades del FMI vinculadas al programa de rescate financiero.

Ante la creciente agitación rural, el gobierno retrocedió parcialmente. En octubre de 2025, las autoridades anunciaron un precio de sustentación del trigo de Rs3.500 por 40 kilogramos (12,5 USD). Los líderes campesinos dejaron claro que la negativa anterior a anunciar el PMS respondía a las instrucciones del FMI y no a la necesidad política interna. Las protestas demostraron que la resistencia rural organizada puede todavía desafiar las reformas neoliberales, incluso en condiciones de crisis económica y dependencia de la deuda.

Sin embargo, esta concesión resultó ser temporal. Incluso cuando el precio de sustentación fue restablecido en el papel, el gobierno comenzó simultáneamente a diseñar una transición hacia un sistema triguero plenamente basado en el mercado.

Política Triguera 2025–26: Transición hacia un sistema de mercado neoliberal

El desmantelamiento del PMS se está institucionalizando ahora mediante un nuevo marco de política. En 2025, el Ministerio de Seguridad Alimentaria e Investigación Nacional introdujo la “Política Triguera 2025–26: Transición hacia un Sistema Basado en el Mercado”. La política apunta explícitamente a



desregular el mercado del trigo y reducir el rol del Estado en la compra y el almacenamiento.

Bajo la propuesta Política Triguera 2025–26, la compra pública sería gradualmente reemplazada por adquisiciones del sector privado, mientras el Estado se limitaría a un rol regulatorio. Si bien los funcionarios afirman que la política garantiza la “eficiencia del mercado”, su objetivo más profundo es reestructurar la economía triguera de Pakistán en torno al control del sector privado. El cambio representa una reestructuración fundamental de la economía granera de Pakistán, siguiendo las exigencias del FMI de dismantelar los mecanismos estatales de compra y orientar los mercados de granos hacia el comercio liberalizado.

Punjab — la mayor provincia productora de trigo de Pakistán — ha avanzado aún más hacia la privatización. Bajo la Política Triguera de Punjab 2026, el gobierno provincial ya no comprará trigo directamente a los agricultores. En cambio, empresas privadas comprarán el trigo directamente a ellos. A principios de 2026, el gobierno de Punjab había precalificado a 35 empresas para participar en este sistema. Actualmente, 11 empresas están habilitadas en la licitación técnica, mientras que el departamento de alimentos descalificó a cinco comerciantes. La política garantiza a estas empresas sus márgenes de ganancia, convirtiendo efectivamente la compra de trigo en un lucrativo negocio corporativo. La lista de empresas participantes revela la creciente captura corporativa del sistema alimentario de Pakistán. Entre los actores involucrados se configura una poderosa alianza de operadores mundiales de materias primas, casas comerciales domésticas, bancos y corporaciones vinculadas al sector militar.

Entre los actores más prominentes se encuentra la Compañía Fauji de Fertilizantes (FFC, por sus siglas en inglés), un importante conglomerado agroindustrial perteneciente a la Fundación Fauji, una de las mayores redes corporativas vinculadas al sector militar de Pakistán. La Fundación Fauji opera en sectores que incluyen la producción de fertilizantes, la banca, la energía y el procesamiento de alimentos. Su creciente papel en la agricultura



refleja la expansión de la influencia del capital militar-corporativo dentro de la economía paquistaní. La participación de FFC en la compra de trigo se intersecta directamente con la Iniciativa Pakistán Verde, un programa respaldado por el Estado que promueve la agricultura corporativa a gran escala mediante arrendamientos de tierras a largo plazo y proyectos agroindustriales con apoyo militar. Al controlar el suministro de fertilizantes, los insumos agrícolas y ahora la compra y el almacenamiento de granos, estos conglomerados están posicionados para dominar múltiples etapas de la cadena de valor agrícola.

La presencia de gigantes agroindustriales globales subraya aún más la dimensión internacional de estas reformas. Empresas como Louis Dreyfus Company y Cargill — dos de los mayores operadores mundiales de materias primas agrícolas — también han sido vinculadas al emergente sistema de compras. Estas multinacionales forman parte de un reducido grupo de corporaciones que dominan el comercio mundial de granos, controlando extensas redes de infraestructura de almacenamiento, logística de transporte, bolsas de materias primas e instrumentos financieros. Sus modelos de negocio dependen fuertemente del comercio especulativo y la consolidación de las cadenas de suministro globales.

En todo el Sur Global, dichas corporaciones han expandido su influencia aprovechando los mercados liberalizados y los programas de ajuste estructural que desmantelan las instituciones públicas alimentarias. Su entrada en el mercado triguero paquistaní señala la integración más profunda del sistema alimentario del país en los circuitos de materias primas globales, donde las decisiones sobre precios y suministro reflejan cada vez más las estrategias corporativas y no las necesidades de los agricultores.

Junto a los operadores multinacionales se encuentran varias grandes empresas domésticas y grupos agroindustriales — entre ellos Boota Brothers, Ali Imran, Haji Sons, Chapal Traders, N&M, Ravel Flour, Zulnoorain, Zariya y SBRS — muchos de los cuales operan en el comercio de materias primas, molienda de harinas y logística agrícola. Se espera que estas empresas



funcionen como agregadores regionales de trigo, comprando grano directamente a los agricultores mientras controlan la infraestructura de almacenamiento y las redes de distribución. Instituciones financieras como Askari Bank, estrechamente vinculado al complejo militar-industrial de Pakistán, proveerán financiamiento para las operaciones de compra.

Mientras Punjab privatiza rápidamente la compra de trigo, otras provincias han adoptado enfoques distintos. El gobierno de Khyber Pakhtunkhwa ha introducido un sistema híbrido, en el que el 75% de la compra permanece en el sector público y el 25% es gestionado por empresas privadas. Mientras tanto, Sindh ha optado por continuar con la compra en el sector público para estabilizar los precios y garantizar la seguridad alimentaria. Estas diferencias de política ponen de manifiesto las crecientes tensiones entre las agendas federales de reforma del mercado neoliberal y las preocupaciones provinciales. La implementación dispar refleja tanto el carácter controvertido de estas reformas orientadas al mercado como las capacidades variables de los gobiernos provinciales para resistir los ajustes estructurales impuestos por el FMI.

El fin de PASSCO y el ascenso de los operadores corporativos de granos

Un cambio institucional de envergadura acompaña esta transición. El gobierno federal ha comenzado a reemplazar la Corporación Paquistaní de Almacenamiento y Servicios Agrícolas (PASSCO) — el organismo central responsable de la compra de trigo — por una nueva entidad, la Compañía de Gestión de Existencias de Trigo (WSMC, por sus siglas en inglés).

La WSMC ha sido propuesta como un vehículo de propósito especial con un capital autorizado de Rs 350.000 millones, diseñado principalmente para gestionar el cierre de PASSCO y liquidar sus pasivos pendientes de aproximadamente Rs 121.000 millones. Sin embargo, a diferencia de PASSCO, este organismo está concebido primordialmente como un vehículo financiero para administrar las existencias actuales de trigo y saldar las deudas de la corporación, en lugar de comprar grano activamente. El cambio reduce aún



más el papel de las instituciones públicas en la gestión de las reservas alimentarias, reforzando la transición hacia una economía triguera controlada por el sector corporativo.

A diferencia de PASSCO, el nuevo organismo no comprará trigo directamente. En cambio, desempeñará un rol regulatorio y de coordinación limitado, mientras el sector privado se hace cargo de la compra, el almacenamiento y la distribución. Esto marca efectivamente el fin de un sistema público que en su momento estabilizó los mercados trigueros tanto para los agricultores como para los consumidores.

Inflación, impactos climáticos y el colapso de los medios de vida rurales

Los agricultores paquistaníes están siendo aplastados hoy por una tormenta perfecta de crisis. Los precios de los insumos agrícolas se han disparado por la inflación y la supresión de subsidios, mientras que los precios de los productos permanecen estancados o son deprimidos por instituciones neoliberales como el FMI, las corporaciones y la manipulación del mercado. Los agricultores venden su trigo, arroz y verduras a precios irrisorios durante la temporada de cosecha, para luego tener que recomprar alimentos a precios inflados — un cruel ciclo que profundiza la pobreza y el endeudamiento.

El cambio climático agrega otra capa brutal a esta crisis. Las inundaciones, sequías y olas de calor recurrentes han destruido cosechas y alterado los ciclos de producción; sin embargo, el Estado no ofrece ninguna compensación ni seguro significativo a los pequeños productores. En cambio, los desastres climáticos son utilizados como pretexto para promover la agricultura inteligente frente al clima y la agricultura corporativa — una narrativa de lavado verde que entrega más tierras a la agroindustria y al sector militar, en lugar de apoyar a los campesinos que han cultivado la resiliencia durante generaciones.

A falta de precios mínimos de sustentación y de compra estatal, los agricultores quedan a merced de comerciantes y acaparadores abusivos que compran barato y venden caro. El resultado es paradójico: Pakistán, una



nación agraria, se encuentra hoy sacudida por la inflación alimentaria, el hambre y la desnutrición — mientras sus productores se hunden cada vez más en la desesperación.

De los precios justos a los mercados libres: el diseño neocolonial de la OMC

El ataque a los precios mínimos de sustentación (PMS) y al apoyo estatal no es simplemente una decisión de política interna; refleja las presiones combinadas de los programas de ajuste estructural del FMI y las reglas del comercio mundial que limitan la capacidad de los países en desarrollo para apoyar a sus agricultores. Forma parte del marco neoliberal más amplio liderado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que impone el fundamentalismo de mercado en todo el Sur Global. A través del Acuerdo sobre Agricultura (AoA, por sus siglas en inglés), países como Pakistán se ven obligados a abrir sus mercados, recortar los subsidios agrícolas y permitir importaciones sin restricciones, incluso cuando esto destruye la producción local.

Estas políticas de supuesto “libre comercio” son en realidad regímenes comerciales neocoloniales, diseñados para asegurar mercados para las corporaciones agroindustriales del Norte Global mientras se socava la soberanía alimentaria en el Sur. La dependencia de Pakistán de alimentos e insumos importados ha crecido bajo estas políticas, profundizando el déficit comercial y exponiendo a los agricultores a los volátiles mercados globales con los que no pueden competir. La factura de importaciones de alimentos de Pakistán aumentó un 15,22 por ciento, alcanzando los 7.090 millones de dólares en los primeros nueve meses del año fiscal actual, frente a los 6.150 millones del mismo período del año anterior. Las condicionalidades de la OMC y el FMI actúan de la mano para dismantlar la agricultura pública, privatizar recursos y convertir la alimentación en mercancía — transformando la agricultura en un campo de juego para las corporaciones y los financistas, y no en un medio de vida para las personas.



Una alternativa centrada en el campesinado: recuperar la soberanía alimentaria

Pakistán puede tomar un camino diferente. Restablecer y ampliar los PMS, reconstruir los sistemas públicos de compra y regular los mercados de granos son medidas esenciales para proteger a los pequeños agricultores y estabilizar los precios de los alimentos. El Estado debe recuperar el espacio de política frente a las restricciones del FMI y desafiar las reglas del comercio mundial que socavan los sistemas alimentarios domésticos.

La reforma agraria redistributiva sigue siendo central. Sin redistribuir la tierra de las élites feudales, los inversores corporativos y los conglomerados militares, la soberanía alimentaria seguirá siendo frágil. El control democrático sobre las instituciones agrícolas, las cooperativas de agricultores y los servicios de extensión rural podría apoyar medios de vida sostenibles y la agricultura agroecológica.

Sin embargo, la resistencia sigue creciendo. Las organizaciones campesinas y los movimientos sociales de todo Pakistán se movilizan para defender el PMS, la compra pública y los derechos de los agricultores. Para nosotros, la lucha por precios justos no es simplemente una demanda económica, sino una lucha más amplia por el control democrático de los sistemas alimentarios. Garantizar la soberanía alimentaria requiere políticas que prioricen los medios de vida de los agricultores, la sostenibilidad ecológica y la rendición de cuentas pública, en lugar de las ganancias corporativas.

Pakistán se encuentra en una encrucijada. Un camino conduce hacia una reestructuración neoliberal más profunda, donde la agricultura se integra plenamente en los mercados mundiales de materias primas dominados por instituciones neoliberales y coloniales, corporaciones multinacionales y élites domésticas. El otro camino exige la reconstrucción de las instituciones públicas, garantías de precios sólidas para los agricultores, una reforma agraria redistributiva y el compromiso con la soberanía alimentaria. Para millones de pequeños agricultores paquistaníes, las apuestas no podrían ser



más elevadas. El futuro del sistema alimentario del país — y la supervivencia de sus comunidades rurales — depende de si la agricultura sigue siendo un bien público o se convierte en un dominio más del poder corporativo.